

## **CONFERENCIA DEL DOCTOR EN CIENCIA LUIS SUÁREZ SALAZAR\* “AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRISIS DEL CAPITAL Y LUCHAS SOCIO-POLÍTICAS”/ JUIZ DE FORA-21 DE OCTUBRE DEL 2009.**

Estimadas y estimados colegas:

Queridas y queridos estudiantes:

Ante todo me siento obligado a expresarles mis más sinceros agradecimientos a los organizadores y a las organizadoras de este Seminario Internacional – y en particular a las profesoras doctoras Leila Delgado, María Rosângela Bastisoni y Cristina Bezerra— por la oportunidad que me han ofrecido de compartir con ustedes algunas de las reflexiones que he venido realizando acerca de lo que en el programa de este evento aparece con el título “América Latina y el Caribe: crisis del capital y luchas sociales”; pero que, por las razones que veremos después, prefiero llamar “luchas sociopolíticas” contra el sistema de dominación oligárquico, plutocrático e imperialista (categoría que se utiliza poco en Brasil) instaurado en la mayor parte del mundo y, en particular, en Nuestra América.

Ese agradecimiento es mayor porque no soy profesional del Servicio Social; ni tampoco soy economista. Como ustedes saben, estos últimos son los y las que, por lo general, han “monopolizado” el análisis de las sucesivas crisis cíclicas, de onda larga o de onda corta, de superproducción o de sub-consumo que han venido afectando al sistema capitalista mundial, desde su advenimiento al proscenio de la historia. Aunque todos los días me esfuerzo por lograr la que Inmanuel Wallerstein denomina “unidisciplinarietà” que debe caracterizar el pensamiento crítico inherente a las que él llama “Ciencias Sociales históricas”, mi mundo intelectual es el de la sociología, el de las ciencias políticas, el de la historiografía y, en algunos casos, el de “la filosofía”. Esa rama del saber que, durante “la modernidad”, ha venido abandonado, poco a poco, su pretensión de sintetizar las prácticas y saberes sobre “lo justo y lo bueno” (la ética), sobre “lo bello” (el arte) y sobre “la verdad”, (las ciencias), cada vez más disgregadas en diversas

disciplinas, tanto de las llamadas “ciencias naturales y exactas”, como de “las ciencias sociales” y de la denominada “cultura artístico-literaria”.

---

\* Prof. Universidad Habana/Cuba.

Por otra parte, como nuestro-americano, nacido en Cuba, la Mayor de las Antillas, también quiero agradecerles a los organizadores y a las organizadoras de este Seminario que, en el título de la conferencia que me solicitaron, hayan incluido el Caribe. En los diversos eventos en los que usualmente participo en América del Sur, por general sólo se refieren a “Latino América”, expresión que —como recientemente indiqué en la conferencia que pronuncié en el XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social realizado en Guayaquil, Ecuador— deja por fuera a los 13 Estados-nacionales-territoriales no latinos que integran el llamado Caribe insular y continental. Incluso, en muchos casos, la expresión “América Latina y el Caribe” sólo se utiliza para referir a los 33 Estado-nacionales o plurinacionales, independientes o formalmente independientes ubicados al sur del río Bravo y de la península de Florida.

Por tanto, se ignoran los 15 territorios del sur del continente americano que —más de doscientos años después del inicio de las luchas por la independencia frente a sus correspondientes colonialismos europeos de la que Simón Bolívar llamó “la América meridional” (para diferenciarla de los Estados Unidos) y cinco décadas después que la Organización de Naciones Unidas clamara por la descolonización del entonces llamado “tercer mundo”— todavía permanecen sometidos a diversas formas de dominación colonial por parte de Estados Unidos, Francia, Holanda e Inglaterra. Entre esos territorios me siento obligado a resaltar el llamado “caso de Puerto Rico”, archipiélago colonizado por Estados Unidos desde 1898 y que, desde hace varias décadas, engañosamente ha sido definido como un “Estado Libre Asociado” con esa potencia imperialista.

Cualesquiera que sean los juicios que a ustedes les merezcan esas afirmaciones, lo cierto es que en estos momentos y como una de las tantas expresiones de las luchas sociopolíticas, anti-neoliberales, anticapitalistas y antiimperialistas y por la emancipación que en la actualidad se desarrollan en América Latina y el Caribe (a ellas volveremos después), en el territorio portorriqueño continúan desplegándose multiformes contiendas tanto por la defensa de su identidad

nacional, por la total desmilitarización de su territorio, por la defensa de su medio ambiente, por su independencia política, así como contra el terrible impacto que ha tenido en su población la llamada “crisis económico-financiera” que está atravesando la cada vez más desequilibrada, plutocrática y excluyente socio-economía estadounidense.

Tal vez, por acá hayan llegado los ecos de la combativa huelga general realizada en Puerto Rico el próximo pasado 15 de octubre como respuesta al despido por parte del gobierno colonial (actualmente encabezado por Luis Fortuño) de más de 20 000 trabajadores, trabajadoras, empleadas y empleados oficiales. Si en el futuro próximo esas movilizaciones populares no logran revertir esas y otras decisiones regresivas de ese gobierno anexionista, miles de familias de ese archipiélago tendrán que sufrir la humillación (que ya padece más del 40% de su población) de vivir al amparo de las cada vez más menguadas y “focalizadas” políticas asistencialistas impulsadas por los grupos dominantes, el poderoso aparato estatal y sucesivos gobiernos temporales estadounidenses, como parte de sus diversas estrategias políticas, militares, de seguridad, económicas e ideológico-culturales dirigidas a sostener su sistema de dominación colonial sobre ese archipiélago latinoamericano y caribeño.

Sirvan esas referencias para demandar vuestra solidaridad con las luchas del pueblo portorriqueño; al igual que con las de los trabajadores y la población de las colonizadas islas caribeñas de Guadalupe y Martinica, colonizadas por Francia bajo el subterfugio de definir las como Departamentos Franceses de Ultramar. A comienzos de este año –exactamente en febrero– en esas dos islas también se desplegaron diversas movilizaciones populares contra las cada vez más expoliadoras y discriminatorias políticas económico-sociales emprendidas por sus clases dominantes y por sus autoridades coloniales. Estas cuentan el decidido apoyo del gobierno encabezado por Nicolás Sarkozy; quien en meses pasados tuvo la desfachatez de demandar “la refundación del capitalismo”: formación económico-social causante de las superpuestas crisis (social, ambiental, energética, alimentaria, económica, financiera, ética y civilizatoria) que hoy están afectando a la Humanidad (y no sólo “al capital”); y en particular a los Estados, las naciones y los pueblos de Asia, África, América Latina y el Caribe.

Como ustedes saben, todas esas crisis fueron agudizadas por la contra-reforma y la contrarrevolución neoliberal en lo económico, neoconservadoras en lo político y post-modernista en lo ideológico-cultural iniciadas en Chile y Argentina por las dictaduras militares entronizadas en la década de 1970, pero generalizadas en todo el mundo y, en particular, en el continente americano (incluidos Canadá y Estados Unidos) en la última década del siglo XX. No tengo tiempo para ofrecer todos los datos que fundamentan esas afirmaciones. Además, ya son bastante conocidas las nefastas consecuencias ambientales, sociales, económicas y políticas que tuvieron para nuestro continente y, en particular, para amplios sectores populares –incluidas las llamadas “clases medias”– las políticas impulsadas por los artífices de la llamada “revolución conservadora” encabezada por Ronald Reagan (1981-1989) y Margaret Thatcher, así como por el llamado Consenso de Washington de 1990. Este último elaborado en los corrillos de los organismos financieros internacionales controlados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo; pero aceptado por la mayor parte de los gobiernos democráticos-representativos del hemisferio occidental.

Ahora sólo quiero acentuar que, aprovechando la autodestrucción de los que intelectual y estadista cubano Carlos Rafael Rodríguez llamó “falsos socialismos europeos”, la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y las derrotas (algunas de ellas, sangrientas) o la neutralización de las multiformes luchas populares, democráticas, anticapitalistas, anticolonialistas, antineocolonialistas y antiimperialistas que se desplegaron en los años previos, así como con vistas a garantizar la presunta irreversibilidad de esa contrarrevolución y esa contrarreforma mundial y hemisférica, las clases dominantes, los poderes fácticos y sucesivos gobiernos temporales de Estados Unidos (ya fueran demócratas o republicanos), junto a sus correspondientes aliados o subordinados hemisféricos o extra-hemisféricos (como la Unión Europea), emprendieron, con variados éxitos, diversas estrategias dirigidas a institucionalizar lo que en algunas de mis publicaciones he llamado “un nuevo orden panamericano”.

Tampoco tengo tiempo para detallar los diversos componentes político-jurídicos, institucionales, económicos, militares, de seguridad e ideológico-culturales de ese pretendido

“orden” hemisférico; necesario –en la visión geopolítica y geoeconómica de la oligarquía financiera y tecnocrática, así como del complejo militar-industrial estadounidense— para edificar, bajo su cada vez más cuestionada hegemonía, el “nuevo orden mundial” proclamado por el ahora ex presidente de Estados Unidos, George H. Bush (1989-1993) e impulsado por los también ex presidentes William Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009). Este último –como ustedes saben— con el pretexto de la que llamó “guerra preventiva contra el terrorismo de alcance global”.

Desde mi punto de vista todos esos elementos –y otros que veremos después— están íntimamente vinculados a las multiformes luchas sociales y de clases, por la profundización de la democracia, por la equidad y la justicia social, por la liberación nacional, así como por la emancipación social y cultural que, desde hace varios años, han venido librando los “viejos” y “nuevos” movimientos sociales y políticos –incluidos los diferentes destacamentos de las también llamadas “vieja” y “nueva” izquierda, social, política e intelectual— que en la actualidad actúan en los 33 Estados nacionales o plurinacionales, así como en algunos de los territorios del “hemisferio occidental” colonizados, como ya dije, por diferentes potencias imperialistas europeas y por el imperialismo estadounidense.

En razón de esa diversidad situacional, geográfica y de sus heterogeneidades constitutivas y organizativas, resulta muy difícil definir, en un tiempo tan breve, todas las vindicaciones sectoriales, locales, nacionales y globales de cada uno de esos movimientos socio-políticos. Basta decir que ellos trascienden las luchas contra “el capital” y que, por tanto, han enriquecido el programa de cualquier movimiento emancipador que ahora o en el futuro previsible se desarrolle en nuestro continente. Sobre todo de aquellos que, con mayor o menor precisión y consistencia, han comenzado a propugnar el ahora llamado “Socialismo del siglo XXI”.

Mucho más porque las diversas demandas “transversales” de esos movimientos socio-políticos interactúan, de una u otra forma, con la imperiosa necesidad de contener y, en la medida de lo posible, revertir las más graves secuelas ecológico ambientales (la deforestación, la contaminación de las aguas, la desertificación, la destrucción de las barreras coralinas...), políticas (las limitaciones a la democracia, entendida como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el

pueblo), así como las más bochornosas consecuencias ideológico-culturales (como la discriminación racial, de género, de generación, de opciones sexuales, así como las que sufren las discapacitadas y los discapacitados) y socio-económicas (el hambre, la desnutrición, la pobreza, la marginalidad, la ignorancia, la mortalidad proveniente de las enfermedades curables, la informalidad, el desempleo y el subempleo, la sobre-explotación de la fuerza de trabajo y la monopolización de la tierra y otros recursos naturales) históricamente causadas por el capitalismo genéticamente depredador, subdesarrollado, *subdesarrollante*, dependiente, desigual, excluyente, así como social y políticamente anti-democrático entronizado en América Latina y el Caribe. A los y las que no lo hayan hecho, les recomiendo leer el cada vez más famoso libro de Eduardo Galeano titulado *Las venas abiertas de América Latina*.

De las entrañas de esos nuevos y viejos movimientos sociales y políticos, así como de las multiformes resistencias estatales y no estatales a los propósitos neo-imperiales ya referidos (como la protagoniza por la ya cincuentenaria Revolución Cubana), brotaron en América Latina y, en menor medida, en el Caribe una pléyade de gobiernos revolucionarios, reformadores, reformistas o, si ustedes prefieren, simplemente progresistas; el más reciente de los cuales es el presidido por Mauricio Funes, quien contó y cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas y sociales agrupadas alrededor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador (FMLN).

Cualesquiera que sean las críticas, más o menos justificadas, según el caso, que podamos realizarles a esos y otros gobiernos genéricamente llamados “de izquierda”, objetivamente todos ellos contribuyeron a cambiar el mapa político y, por tanto, a debilitar (aunque no a derrotar) el sistema de dominación oligárquico-plutocrático e imperialista instaurado sobre el hemisferio occidental. Sobre todo, en la misma medida en que la reaccionaria administración republicana de George W. Bush y los representantes políticos, militares, para-militares o mediáticos de las clases dominantes pretendidamente “nacionales” de sus correspondientes países fracasaron en sus reiterados intentos por contener (*contaiment*) o derrotar (*roll back*) por diferentes medios –algunos de ellos, violentos— a las fuerzas sociales y políticas que los respaldaron y, en la mayoría de los casos, todavía respaldan a la Revolución Cubana, a la Revolución Bolivariana que se desarrolla en

Venezuela, a la Revolución Democrática y Cultural que se despliega en Bolivia, a la Revolución Ciudadana que se está llevando a cabo en Ecuador, así como a otros procesos de cambios favorables a los intereses nacionales y populares que se están desplegando en todo el continente.

A pesar de la heterogeneidad de esos procesos, de sus diversos horizontes programáticos y, por tanto, de la mayor o menor profundidad de las transformaciones internas o externas que cada uno de ellos han emprendido, sin dudas, su excepcional confluencia temporal y espacial propició que en esta parte del mundo comenzaran a institucionalizarse —por primera vez en su historia— nuevos mecanismos de concertación política, cooperación e integración económica que están buscando alternativas nacionales, plurinacionales, populares, estatales o supra-estatales para enfrentar las superpuestas crisis que afectan al sistema capitalista mundo y, en particular, la crisis económico-financiera que actualmente tiene su epicentro en Estados Unidos.

Entre esos proyectos de concertación política, cooperación e integración económica siempre habrá que destacar a la ahora llamada Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP), en estos momentos integrada por los gobiernos y por diversos movimientos socio-políticos de Antigua y Barbudas, Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras (me refiero al gobierno legítimo presidido por Manuel Zelaya, a cuya situación volveré después), Nicaragua, la República Bolivariana de Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Con excepción de los de Bolivia y Ecuador, así como de los de Barbados y Trinidad y Tobago, todos los gobiernos antes mencionados también participan —junto al denominado “gobierno socialdemócrata de Guatemala” y a los de casi todos los Estados-nacionales integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM)— en el acuerdo energético conocido con el acrónimo PETROCARIBE, al igual que en los acuerdos de cooperación económica y social llamados ALBA-CARIBE. En las difíciles condiciones de esa región, ambos acuerdos buscan conjurar el impacto negativo que ya está teniendo en sus diferentes Estados la actual crisis económico-financiera en curso; así como las plutocráticas acciones emprendidas por las principales potencias capitalistas integrantes del Grupo de los Siete (G7) y, por consiguiente, del llamado Grupo de los Veinte (G20).

De una u otra forma, esos acuerdos –junto a la inconclusa ampliación y la difícil reforma del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y a la contigua crisis que está sufriendo la Comunidad Andina (CAN)— también favorecieron la institucionalización de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), la progresiva ampliación del llamado Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro (ahora integrado por 23 gobiernos del continente, incluido el de Cuba) y la realización, a iniciativas del presidente brasileño Luiz Inácio (Lula) da Silva, en San Salvador de Bahía, Brasil, a fines del 2008, de la llamada Primera Cumbre para la Integración y el Desarrollo de América Latina y el Caribe (CALC). Ocasión en que, por primera vez en la historia, se reunían absolutamente todos los jefes de Estado y gobierno de ese continente, sin ser convocados previamente por la Unión Europea (UE) o por Estados Unidos. La segunda de esas cumbres se realizará en México a comienzos del año 2010. En ella se supone que, entre otras cosas, se aprueben las primeras propuestas dirigidas a fundar una organización de Estados latinoamericanos y caribeños, alternativa o, al menos, diferente a la Organización de Estados Americanos (OEA) que en la actualidad constituye el núcleo político-jurídico y político-militar del llamado Sistema Interamericano.

Debemos recordar que, a pesar de todas las reformas sufridas por la OEA y de los más recientes esfuerzos dirigidos a “modernizarla” y re-legitimarla (incluida la derogatoria incondicional de los acuerdos de esa organización que en 1962 expulsaron a Cuba bajo el pretexto de “la incompatibilidad” del socialismo cubano con el Sistema Interamericano, así como su actitud condenatoria frente al Golpe de Estado en Honduras), esa organización surgió en 1948 –manchada con la sangre del pueblo colombiano durante la asonada popular conocida como “el Bogotazo”— como expresión de las alianzas asimétricas entre los gobiernos anti-populares de 21 países del hemisferio occidental y, por tanto, como complemento del sistema de dominación –hegemonía, acorazada con la fuerza, como lo definió Antonio Gramsci— instaurado en el hemisferio occidental por la oligarquía financiera, los poderes fácticos y sucesivos gobiernos temporales de Estados Unidos.

De ahí que en los movimientos sociales y políticos, así como en los gobiernos más radicales del continente –en primer lugar, los de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y la



República Bolivariana de Venezuela— se haya entronizado el criterio de que la OEA fue y sigue siendo uno de los instrumentos de las estrategias imperialistas dirigidas a “recolonizar” o “re-neocolonizar” a Nuestra América Latina. No tengo tiempo para explicar y discutir ese criterio fundado en los terribles comportamientos de esa organización —al igual que de la tristemente célebre Junta Interamericana de Defensa (ahora “subordinada” a la OEA)— en los momentos más cruciales de la historia latinoamericana y caribeña.

Pero a estas alturas de la exposición ya es oportuno plantear que la re-legitimación y el fortalecimiento del Sistema Interamericano, al igual que de las llamadas Cumbres de las Américas y las decenas de reuniones de alto nivel político y político-militares (como las llamadas Cumbres de Ministros de Defensa) que se han desarrollado y se siguen desarrollando a su amparo, está presente entre las estrategias que se ha planteado la administración de Barack Obama con vistas a lograr lo que durante su campaña electoral y en los nueve meses que ya lleva en la Casa Blanca ha denominado “la renovación del liderazgo, la credibilidad y la influencia” de su país en América Latina y el Caribe.

Todas ellas deterioradas —según su sesgado y “desmemoriado” diagnóstico— porque la administración de George W. Bush “se embarcó en una guerra desquiciada con Irak” y abandonó su promesa de “hacer de Latinoamérica un compromiso fundamental de su presidencia”. En consecuencia, a decir de Obama, la política de su antecesor habría sido “de negligencia hacia nuestros amigos, inefectiva con nuestros adversarios, desinteresada por los problemas que sufre la gente e incapaz de hacer avanzar nuestros intereses [e Estados Unidos] en la región”. Ese “vacío” —siempre según Obama— habría sido ocupado por “demagogos como Hugo Chávez”, así como por otros países de Europa y Asia; entre los que destacó a la República Popular China y a la República Islámica de Irán. Con vistas a enfrentar esas situaciones y a “liderar el hemisferio en el siglo XXI”, Obama anunció que emprenderá la que indistintamente denominó una “diplomacia directa, fuerte, agresiva, principista y sostenida” hacia todos “los gobiernos amigos, adversarios y enemigos” del hemisferio occidental, incluidos en estas dos últimas categorías, a los gobiernos integrantes del ALBA-TCP.

Entre sus acciones al respecto y siguiendo algunas de las recomendaciones de la bipartidista Comisión para una Potencia Inteligente respaldada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos, Obama también anunció que –sin abandonar en los casos necesarios los instrumentos del *hard power* (la coerción y la fuerza)—potenciará algunos de los componentes del llamado “poder blando” (*soft power*). Entre ellos, la Diplomacia Pública utilizando a “los emigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos”, el aumento de la presencia de funcionarios del Departamento de Estado en América Latina y el Caribe, así como la duplicación para el año 2012 del número de los integrantes de los controvertidos Cuerpos de Paz que –desde la administración de John F. Kennedy— han venido cumpliendo diversas tareas de espionaje y contra insurgentes en este continente.

Además, según se infiere de las palabras de Obama, la participación de esos “voluntarios” de los Cuerpos de Paz en actividades dirigidas a “disminuir la pobreza, a combatir enfermedades como la malaria y a apoyar el desarrollo de la sociedad civil” estará orientada a contrarrestar el negativo impacto que han tenido “en la influencia de Estados Unidos” en varios países latinoamericanos y caribeños los diversos programas sociales emprendidos por Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, tanto de manera bilateral, como dentro de los marcos del ALBA-TCP y de los ya referidos Acuerdos ALBA-Caribe. Entre ellos la llamada “Operación Milagro” (dirigida a devolverle la vista gratuitamente a millones de latinoamericanos, latinoamericanas, caribeños y caribeñas) y la lucha contra el analfabetismo; recientemente erradicado –según ha reconocido la UNESCO— en Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela.

Sin negar los cambios que la sola elección de Obama significó en el ancestralmente racista sistema político, en la sociedad y en la proyección externa de los Estados Unidos, ni las diferencias existentes entre su administración y la de su reaccionario y, además, escasamente inteligente predecesor republicano, las contradictoria naturaleza reformista, contra insurgente y, en algunos aspectos, contra-reformadora y contrarrevolucionaria de la actual “presidencia imperial” estadounidense se evidencia en la perduración del criminal bloqueo económico y financiero contra el pueblo cubano, en los recursos que le han continuado entregando las mal

llamadas Agencia para la Ayuda Internacional [al desarrollo] (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) a las principales fuerzas desestabilizadoras de las revoluciones cubana, bolivariana y boliviana, así como a otros gobiernos de izquierda del continente.

También se evidencia en el continuado despliegue de los diferentes planes político-militares (como el llamado Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y la Iniciativa Mérida) impulsados por la administración de George W. Bush con el pretexto de combatir el llamado “narco-terrorismo”. Asimismo, en la continuidad de las labores que ha venido desarrollando el Comando Norte del Ejército (NORTHCOM) y el súper ministerio de la Seguridad “interna” de Estados Unidos, con vistas a defender la que, de manera eufemística, llaman “seguridad y la prosperidad” de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México). A estas se agregan la organización de la llamada IV Flota y el cada vez más fortalecido sistema de bases y facilidades militares que –bajo la conducción del Comando Sur del Ejército de Estados (SOUTHCOM)— permanecen en Cuba y Puerto Rico (donde perdura el llamado “polígono electrónico” y otras bases de entrenamiento de la Guardia Nacional, la reserva del ejército y la infantería de Marina estadounidense) y que se han venido instalando en los últimos años en otras islas colonizadas del Caribe (como Aruba y, Curazao), al igual que en Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras) y, más recientemente, en Colombia.

No tengo que hablar mucho del terrible peligro que entraña para todo el continente (en particular para los gobiernos considerados como sus “adversarios” o “enemigos” por las autoridades oficiales estadounidenses) y para la necesaria búsqueda de una solución político-negociada del prolongado y cruento “conflicto interno” que afecta a Colombia, las siete bases militares, navales y aéreas que, al menos, en los próximos diez años podrán utilizar las fuerzas armadas estadounidenses. Seguramente ustedes han oído hablar bastante de esas bases, de las discusiones que el respecto produjeron en la Cumbre extraordinaria de UNASUR efectuada en Bariloche, Argentina, al igual que en la reunión del recién creado Consejo Suramericano de Defensa efectuada en Ecuador hace unas pocas semanas. También deben haber escuchado las constantes negativas del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de informar los contenidos de los acuerdos firmados con el gobierno estadounidense.

Al respecto sólo quiero agregar que a ese sistema de bases militares instaladas en la Cuenca del Caribe y algunas de ellas en la región andino-amazónica, se agregarán las facilidades militares ya existentes en Paraguay y Perú, la presencia de los órganos de inteligencia estadounidense en la llamada “triple frontera” entre Argentina, Brasil y Paraguay, así como las cuatro nuevas bases policiales y aeronavales que serán ubicadas en Panamá. Según la información disponible, el 30 de octubre próximo pasado, el actual presidente panameño Ricardo Martinelli (típico representante de la llamada “nueva derecha” que está reorganizándose en el continente) y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, firmaron un acuerdo bilateral que contempla, entre otras cosas, establecer “estaciones navales” conjuntas en Bahía Piña, en la provincia de Darién, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, y en Punta Coca, al sur de la provincia de Veraguas, ambas en el litoral panameño bañado por el Océano Pacífico.

Cualquiera que sea el pretexto con el que se instalen, el impacto negativo de esas bases militares en la soberanía y la autodeterminación de los Estados-nacionales y de los territorios coloniales en que han estado enclavadas ha sido más que demostrado a lo largo de la historia. En la otrora llamada zona del Canal de Panamá, al igual que en la isla de Vieques, Puerto Rico, todavía pueden encontrarse muchas evidencias del negativo impacto ecológico, social y político de esos enclaves militares. A su vez, en Ecuador, todavía se recuerdan todas las implicaciones negativas que tuvo para el país la recién desaparecida Base Militar estadounidense ubicada en Manta. Por ello, ahora sólo quiero remarcar el oscuro papel que desempeñaron las fuerzas militares estadounidenses dislocadas en la base coronel Soto Cano (Palmerola) en el golpe de Estado que se produjo en Honduras el 28 de junio del presente año.

A pesar de la heroica, sabia, pacífica y prolongada resistencia del pueblo hondureño – encabezadas por el plural Comité de Luchas contra el Golpe de Estado—, del inédito aislamiento internacional que sufre el régimen de facto instalado en ese país e incluso de las ambivalentes y ambiguas posiciones adoptadas al respecto por la administración de Barack Obama (la que aún se resiste a tipificar lo ocurrido en Honduras como un golpe de Estado), la permanencia en Palmerola de importantes contingentes de las fuerzas militares estadounidenses objetivamente significan un respaldo del *establishment* político-militar de ese país al espurio gobierno

encabezado por Roberto Micheletti y a los sectores de las fuerzas militares y policiales que – desde hace casi cien veinte días— han venido reprimiendo brutalmente a todos los sectores del pueblo hondureño que exigen el retorno inmediato e incondicional de Manuel Zelaya a la presidencia de la República.

No tengo que decirles, que en Honduras se está librando una importantísima batalla por la democracia, por la soberanía y la autodeterminación de todos los Estados-nacionales y de todos los pueblos de Nuestra América. También una importante contienda por la credibilidad de todos los gobiernos del continente –ya sean de derecha, de centro-derecha, de centro-izquierda o de izquierda—, del Sistema Interamericano y de todos los organismos de concertación política, cooperación e integración económica latinoamericanos y caribeños antes mencionados. Esa batalla tiene un impacto directo en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), cada vez más debilitado por los acuerdos en el campo de la seguridad y por el Tratado de Libre Comercio firmados con el anterior gobierno de Estados Unidos, al igual que por la referida presencia de enclaves militares estadounidenses en diferentes países de la región y por el llamado Proyecto Mesoamericano (antes llamado Plan Puebla Panamá), impulsado por sucesivos gobiernos derechistas de México, en consuno con el gobierno de Estados Unidos, con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Ese proyecto –al cual se incorporó recientemente el gobierno de Colombia— persigue crear la infraestructura necesaria para la explotación de los ingentes recursos humanos y naturales de esa zona, así como para fortalecer el control estadounidense sobre las diversas zonas de tránsito entre el Norte y el Sur del continente, al igual que entre los Océanos Atlántico y Pacífico que requieren la principales empresas trasnacionales de todo el mundo; en particular, las denominadas “empresas transnacionales triádicas” que tienen sus casas matrices en Estados Unidos.

Por ello y por otros elementos excluidos en aras del tiempo, el retorno tardío y condicionado de Zelaya a la presidencia, la impunidad de los matarifes del pueblo hondureño (que es lo que mi opinión persigue el llamado Acuerdo de San José de Costa Rica aupado por la

secretaria de Estado Hilary Clinton, por el presidente costarricense Óscar Arias y aceptado como válido por los principales órganos de la OEA) y el eventual reconocimiento del gobierno que resulte electo en las espurias elecciones presidenciales de fines de noviembre puede crear un nuevo y nefasto precedente en un continente, como el nuestro, que a largo de su historia ha sufrido cientos de golpes de Estado, ya sean militares o cívico-militares como el ocurrido en Honduras. Sobre todo porque –como se puede apreciar en diferentes países— las fuerzas de la vieja y la “nueva” derecha de América Latina y el Caribe (apoyadas por los sectores más reaccionarios del sistema político estadounidense y de Europa Occidental) están emprendiendo una poderosa ofensiva contra-reformadora y contrarrevolucionaria contra la mayor parte de los gobiernos de izquierda antes mencionados.

Por consiguiente, en los años venideros, no perderán ninguna oportunidad para tratar de desestabilizar, derrotar electoralmente o derrocar por otras vías a esos gobiernos y para retrotraer donde les sea posible y necesario hasta los más mínimos cambios favorables a los intereses nacionales y populares que se han venido realizando en los últimos años; incluso aquellos que, con todo rigor, sólo pudiéramos calificar como “reformistas” o “neo-desarrollistas”. En la lógica de las clases dominantes en las principales potencias imperialistas y de la que ya comienza a denominarse “la nueva derecha latinoamericana” –plutocrática, neoliberal, neoconservadora y cada vez más asociada y dependientes de las empresas transnacionales estadounidenses y europeas— todas esas medidas contradicen la supuesta “mano invisible” del mercado y, por tanto, sus esfuerzos por “minimizar” el papel socio-económico del Estado, incluidos los emprendimientos que estos desarrollen para fortalecer su papel en los principales servicios públicos, así como en los diversos campos de la seguridad y la asistencia social.

Les pido a todas y todos ustedes que en los próximos días reflexionen con toda profundidad sobre esos temas, íntimamente asociados al negativo impacto que ya están teniendo y que, sin dudas, tendrán en nuestro continente las multifacéticas crisis (socio-ecológica, alimentaria, energética, económica y financiera) que hoy afectan a la humanidad y al sistema capitalista mundial. No tengo tiempo para detenerme en ese tema que, en muchos aspectos, trasciende la conferencia que me solicitaron los organizadores de este evento. Al respecto,

únicamente quiero recordarles que esta crisis no ha sido la primera, ni será la última que afectará al sistema capitalista mundial. Como descubrió Carlos Marx y los economistas políticos que lo secundaron, las crisis cíclicas, ya sean de “onda larga” o de “onda corta”, son inherentes al modo de producción capitalista.

Por tanto existirán mientras no aparezcan los sujetos sociales y políticos capaces de derrotarlo y sustituirlo por una formación económico-social superior, históricamente identificada con los ideales del socialismo. Y como en estos momentos aún no se ven los sujetos sociales y políticos, estatales o no estatales, que cuenten con las fuerzas necesarias para encontrarles inmediatas salidas anticapitalistas y antiimperialistas a las superpuestas crisis de hoy, lo más probable es que los sectores dominantes en la que Wallerstein denomina “economía mundo” seguramente le encontrarán una solución favorable a sus intereses a la que ellos sólo definen como “la crisis económico-financiera” en curso.

Lo que ocurre es que todas las evidencias históricas indican que esa “solución”, más temprano que tarde, afectará los intereses de la Humanidad y, en particular, de los sectores populares desposeídos, tanto del Norte como del Sur. Mucho más porque el análisis crítico de las medidas plutocráticas que han adoptado los gobiernos integrantes del G7 (expresadas en la transferencia de millones de millones de dólares y euros de los contribuyentes a los parasitarios e inescrupulosos sectores de las clases dominantes que precipitaron esta crisis “financiera”) y por la mayoría de los gobiernos integrantes del G20, permiten anticipar que –como en otras crisis capitalistas anteriores— se producirá un nuevo salto en la centralización, la concentración y la transnacionalización de los capitales, la producción, los servicios, los conocimientos, así como en el control y la contigua depredación de los recursos naturales del planeta, incluidas la tierra, el agua y la biodiversidad.

Ese salto incidirá en la que Rui Mauro Marini llamo “sobre-explotación” de los que todavía tengan el privilegio de estar incorporados al mundo del “trabajo formal”, al igual que de la población campesina que aún perdura en diferentes países del mundo. También incidirá en la creciente pauperización de inmensos contingentes humanos y, por tanto, en la agudización del “problema social” que –como bien nos ha recordado, entre otros y otras profesionales del Servicio

Social brasileiro, la Dra. Ana Elizabete Mota en su libro titulado *O mito da assistência social* (cuya segunda edición fue publicada por la editorial Cortez en el año 2008)— son inherentes al modo de producción capitalista, así como a la producción y reproducción del capitalismo monopolista de Estado y de los ahora llamados “neo-capitalismo” y “neo-imperialismo”.

Lo antes dicho y otros elementos excluidos en aras del tiempo profundizarán el círculo vicioso entre el constante crecimiento de la población y la pobreza y el galopante deterior del medio ambiente (PPA) denunciado por la Organización de Naciones Unidas para la Juventud y la Infancia (UNICEF) desde mediados de la década de 1990. Ese círculo vicioso será particularmente incisivo en los países del todavía llamado “tercer” y “cuarto” mundos —a los que pertenecen la mayor parte, por no decir que todos, los Estados nacionales y plurinacionales, así como los territorios colonizados de América Latina y el Caribe— en los que seguramente se incrementarán la llamada “inseguridad ciudadana” y las ya crecidas filas de las y los sin tierra, de las y los sin casas, de las y los sin salud, de las y los sin educación, de las y los sin un empleo digno, de las y los sin protección social, de las y los sin servicios sociales básicos; en fin, de las y los sin una vida digna, de las y los sin futuro o con una vida y un futuro lleno de carencias e incertidumbres.

Todo ello implicará inmensos desafíos para todos los Estados y gobiernos de este continente; incluidos los gobiernos genéricamente llamados “de izquierda”; cuyo futuro político dependerá, en no poca medida, de sus capacidades para emprender estrategias económicas, sociales y políticas, nacionales y supranacionales, claramente diferenciadas de las limitadas y cada vez más “focalizadas” políticas de asistencia social impulsadas por la mayor parte de los Estados capitalistas centrales, semi-periféricos y periféricos, así como por los organismos financieros internacionales. También implicará serios desafíos para los profesionales de las Ciencias Sociales y del Servicio Social que, como ustedes, desempeñan sus labores en América Latina y el Caribe. Coincidiendo con lo dicho por la Dra. Mota en el ensayo que ya mencioné, soy del criterio que no saldremos airoso y airoso de esos desafíos deificando lo que ella llama “el fetiche de la asistencia social”, sino uniendo nuestras capacidades profesionales y nuestras fuerzas con las de todos los sujetos, “actores” y movimientos sociales y políticos, estatales y no estatales, “nuevos” y “viejos”,



gubernamentales o no gubernamentales que en el futuro previsible continuarán luchando por construir un mundo y un continente más bonito y mejor que el que hasta ahora hemos conocido.

Muito obrigado - Muchas gracias.